



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

VISTOS los autos del expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 24 de mayo de 2024, se presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de la cual se requirió a la Fiscalía General de la República lo siguiente:

Descripción clara de la solicitud de información:

Solicito todas aquellas resoluciones, acuerdo, etc, en donde se haya aplicado la teoría del mosaico, esta búsqueda implica a la policía de investigación, o como se denomine esta policía en su institución, de considerarlo necesario solicito la versión pública, lo solicito en formato abierto, es decir en word. por lo que la realización de la versión pública, en su caso, no debe generar un costo para mi.

Agradezco de ante mano sus atenciones, esperando verme favorecido en mi solicitud, y sea aplicada la deficiencia de mi solicitud en cuanto a los terminos correctos.

Modalidad preferente de entrega:

Entrega a través del portal

II. El 30 de mayo de 2024, el sujeto obligado formuló una prevención, en los términos siguientes:

Resulta conveniente hacer de su conocimiento que el derecho de acceso a la información es un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que específicamente en su artículo 130, establece que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos.

En tal virtud, posterior al análisis efectuado a su petición se advierte que requiere tener acceso a documentos "donde se haya aplicado la teoría del mosaico", sin embargo, de la información proporcionada no se cuenta con los elementos suficientes para dilucidar la expresión documental que pudiera atender lo solicitado, aunado a lo anterior, no señala alguna unidad administrativa la cual pudiera poseer la información, máxime que no existe una base de datos que identifique documentales donde se haya aplicado la teoría en mención.

Por tal motivo, con la finalidad de favorecer su derecho de acceso a la información y acorde a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley en mención, se le requiere con el objeto de que especifique la expresión documental y aporte mayores elementos que permitan su localización, y así esta representación social pueda estar en posibilidad de realizar una búsqueda en las diversas unidades administrativas adscritas.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

III. El 30 de mayo de 2024, la persona dio respuesta a la prevención, en los términos siguientes:

me refiero a todo aquel documento en el que se haya aplicado la teoría del mosaico, ya que se ha mencionado en resolución incluso de la suprema corte que fue aplicado, por lo que podría ser policía de investigación, desconociendo como se llame en su área, como unidad de transparencia deberá de turnar mi solicitud a todas las área que conformen la Fiscalía, entre ellos, el comité de transparencia, las áreas jurídicas, sin que sea limitativa esta búsqueda, si no sea enviado a todas la áreas.

IV. El 27 de junio de 2024, el sujeto obligado notificó una prórroga para atender el requerimiento formulado.

V. El 04 de julio de 2024, el sujeto obligado dio respuesta, a través de la Plataforma Nacional, mediante FGR/UETAG/002286/2024, del 02 de julio de 2024, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, en el que se señala lo siguiente:

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la LFTAIP, su solicitud fue turnada para su atención a las unidades administrativas competentes de conformidad con lo establecido en la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), así como su Estatuto Orgánico, las cuales posteriores a realizar una búsqueda de la información de su interés, se localizó documentación coincidente, las cuales ascienden a un total de 109 fojas útiles.

Sin embargo, se le comunica que existe un impedimento material y jurídico para atender su petición en la modalidad señalada, toda vez que por el volumen de la documentación no es posible su remisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, además de que únicamente obra de manera física en los archivos de la Institución.

Por otro lado, para su entrega es necesaria la elaboración de una versión pública, ya que contiene datos que actualizan los supuestos de clasificación de reserva que se citan más adelante, por tanto, ésta podrá ser elaborada previo pago de los costos de reproducción correspondientes, en su caso. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 108 y 136 de la LFTAIP, al Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, y al Criterio 08/17 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra indican:

...

En consecuencia, las documentales de su interés se ponen a su disposición en versión pública previo pago de los costos de reproducción correspondientes, en las cuales se testará información inherente a nombres de personal de la Institución, que actualizan los supuestos de información clasificada como reservada en términos de lo establecido por la fracción V, artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ilustra a continuación:

...



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Lo anterior se relaciona con el Décimo séptimo, Décimo Octavo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales establecen lo siguiente:

...

Ahora bien, es dable señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) prevé lo siguiente:

..

En virtud de lo anterior, se advierte que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la LFTAIP, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares.

Se proporciona la prueba de daño, correspondiente al artículo 110. fracción V.

Riesgo real, demostrable e identificable. Hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo que labora en esta Fiscalía General de la República, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, en virtud de que, como ya lo demostró esta Fiscalía General de la República en la controversia constitucional 325/2019, y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de esta, e inclusive fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, se atendería de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a la Fiscalía General de la República, sino también para mantener la seguridad pública y nacional del Estado mexicano en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país es que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo que labora en las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que por la naturaleza de las funciones de esta Institución, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Así, resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia, pues, desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales, hasta la integración de expedientes que en su caso se requieran, les es posible el acceso a información sensible contenida en esos documentos, que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de la controversia constitucional 325/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal que labora en la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de reacción; por ello, es perjudicial realizar la identificación de dicho personal, pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares. Además, concluyó que esta Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida, se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.

En ese mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia adscrito a la entonces Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte confirmó que revelar la información de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales, es decir, el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate, por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña o desempeñó su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras y/o exservidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están o estuvieron encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayeran en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas; aspecto que, de ocurrir, impactaría negativamente en su



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

Perjuicio que supera el interés público con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda, en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las personas servidoras o ex servidoras públicas de esta Institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionada con el combate y persecución de los delitos federales.

El que los distintos mercados criminales identifiquen y conozcan plenamente al personal que compone a la Institución y cuenten con información respecto a su capacidad de fuerza y reacción, esto es, el número total de personal, sus cargos y dónde se encuentran ubicados, expone a esta Fiscalía General de la República a amenazas y ataques que necesariamente tienen implicaciones negativas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, por tanto, se compromete la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la resolución emitida en la controversia constitucional en comento que esta Fiscalía acreditó con suficiente claridad la relación causal general entre la entrega de la información relativa a los servidores y/o exservidores públicos de la Institución y la afectación a la seguridad pública.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran o laboraron en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona; de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye cónyuges, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos; por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado de fuerza de la Institución.

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con la finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente, a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantengan en reserva, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a la información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. El que una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicite el nombre y cargo de todo el personal de la Fiscalía General de la República no quiere decir que deba obtener el mismo resultado, pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir, si alguno de los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución; de modo que revelar información de inteligencia que afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.

Robustecen lo anterior, las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en donde manifiesta que:

...

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada con el personal que labora en esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Principio de proporcionalidad La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015, concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí se tiene que la calidad de persona servidora o exservidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos frente al derecho de acceso a la información de un particular, en una ponderación frente a los derechos humanos de los servidores y ex servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña o desempeñó el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes tienen o tuvieron la responsabilidad de investigar y perseguir delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas

Por lo expuesto, se concluye que clasificar como reservada la información o datos que permitan la identificación, inclusive de aquella que asevere su adscripción en el presente o pasado, como personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, resulta el medio menos restrictivo frente al derecho de acceso a la información en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Cabe señalar que la clasificación antes referida, fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Fiscalía en su Vigésima primera sesión ordinaria 2024, en la cual se confirmó la clasificación de la información en los términos antes señalados la puesta a disposición de la versión pública del documento requerido, dicha determinación consta en el acta que podrá consultar en la siguiente liga electrónica:

<https://fgr.org.mx/en/transparencia/AccesoInformacionPublica>

En virtud de lo anterior, se solicita informe, a través del correo electrónico leydetransparencia@pgr.gob.mx, si requiere recoger los documentos antes señalados en las oficinas de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental cuya dirección se cita al final del presente escrito, o bien, si desea que se realice la entrega mediante correo certificado a su domicilio una vez que haya cubierto el pago del respectivo servicio, además, de la modalidad en la que desea obtener la información.

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensión 505716; o bien, escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, en donde con gusto le atenderemos." (sic)

VI. El 16 de julio de 2024, la persona interpuso recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en contra de la respuesta del sujeto obligado, en los términos siguientes:

Acto que se recurre y puntos petitorios:

No me brinda la información que solicité pudo hacer una versión publica además no se me entrega el acuerdo con las firmas correspondientes para acceder a su acuerdo de reserva, y considero que lo que solicité no es información reservada.

VII. El 16 de julio de 2024, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente **RRA 10043/24** al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, para los efectos del artículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

VIII. El 06 de agosto de 2024, se dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión, otorgándole a las partes un plazo de siete días hábiles posteriores a dicha notificación para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 156, fracciones I, II y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se notificó a las partes.

IX. El 20 de agosto de 2024, el sujeto obligado remitió a este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FGR/UTAG/003570/2024, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, por medio del cual se expresaron los alegatos siguientes:

A L E G A T O S

PRIMERO. Procedimiento de búsqueda:

Es preciso mencionar que esta Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la LFTAIP, vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil dieciséis, ya que de conformidad con el artículo 133 de la Ley en mención, la solicitud se turnó para su atención a la Fiscalía Especializada en Control Competencial (FECOC), a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR), así como a la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos (UEAJ); toda vez que son las unidades administrativas que de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de la Fiscalía General de la República, así como su Estatuto Orgánico, específicamente en el Título II, Estructura Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuentan con facultades para pronunciarse sobre información del interés del particular.

Así las cosas, atendiendo que el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé la obligación de turnar las solicitudes a todas las unidades administrativas que puedan contar con la información peticionada, o bien, deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, es que se desprende que esta Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, desahogó las gestiones necesarias para atender la solicitud formulada por el particular

SEGUNDO. Fijación de litis.

Derivado de la recepción del presente recurso, así como del análisis realizado a la inconformidad del particular, se dilucida que su agravio consiste esencialmente en la clasificación de la información inmersa en las documentales requeridas.

En tal virtud, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado por la parte recurrente ante ese Instituto, la cual al momento de admitirse la procedencia del mismo se legitima la sustanciación de la presente y, por ende, su resolución; por ello, resulta loable señalar que la litis del proceso, es decir, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal,



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

presenta notas características tales que, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento que para tal efecto emita el Órgano Garante.

En dichas consideraciones, esa Ponencia deberá avocarse exclusivamente al estudio del agravio vertido por la parte recurrente, lo anterior para evitar un posible desbordamiento de la Litis.

TERCERO: En atención al agravio del particular.

Derivado del análisis realizado al agravio formulado por la hoy recurrente, esta Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, requirió a la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos (UEAJ) los alegatos correspondientes, ello en virtud de haber sido el área administrativa que señaló contar con documentación coincidente con lo requerido, la cual manifestó lo siguiente:

Sobre el particular, con fundamento en los artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública; 12 y 13 de la Ley Federal en la materia, así como 5, inciso I), apartado i, inciso a), y 7, fracciones IX y XXXII del Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República, vigente conforme a lo dispuesto por el artículo Transitorio Cuarto del Decreto por el que se expidió la Ley de la Fiscalía General de la República, se hace del conocimiento lo siguiente:

Resulta infundado el agravio del recurrente en el sentido de que “No me brinda la información que solicite pudo hacer una versión pública además no se me entrega el acuerdo con las firmas correspondientes para acceder a su acuerdo de reserva y considero que lo que solicite no es información reservada” (Sic).

Ello es así, ya que la unidad competente si dio respuesta puntual a la solicitud de información puesto que se puso a disposición del ahora recurrente el documento en donde se hace referencia a la aplicación de la teoría del mosaico en versión pública.

Lo anterior de acuerdo con las facultades, competencias o funciones de la Unidad de Constitucionalidad, adscrita a la UEAJ que consisten esencialmente en:

- Someter a consideración del titular de la Institución los proyectos de opinión para el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículo 102, Apartado A, tercer párrafo, y 105, fracciones I y 11, párrafo primero, de la Constitución, en materia de controversias, constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
- Apoyar al Titular de la Institución en el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, y 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de denuncia de contradicción de tesis y de solicitud de modificación de jurisprudencia, e intervenir, en los términos que el Titular establezca, en la formulación de los pedimentos correspondientes.

En consecuencia, de conformidad con lo señalado, se estima que resulta infundado el agravio de la parte recurrente. Al respecto, resulta conveniente señalar el marco jurídico aplicable:

...

De los artículos transcritos se puede advertir lo siguiente:



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus principales finalidades, garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados.
- Los sujetos obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos que se encuentran en sus archivos. en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.
- La información que se presume debe existir en posesión de los sujetos obligados es aquella relativa a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorguen.
- La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que puedan contar con la información de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones.

Respecto a la obligación de los sujetos obligados de entregar únicamente los documentos que obren en sus archivos, el Poder Judicial de la Federación ha manifestado lo siguiente:

...

Como. se advierte del contenido de los preceptos legales aludidos, los sujetos obligados sólo están obligados a entregar información, conforme a lo que obre en sus archivos. de acuerdo con las atribuciones legales que les han sido conferidas.

Así. se concluye que este sujeto obligado dio respuesta a la solicitud formulada, puesto que puso a disposición al ahora recurrente el documento en donde se hace referencia a la aplicación de la teoría del mosaico en versión pública.

De acuerdo con lo señalado, se estima que es infundado el agravio hecho valer por la parte recurrente,

Por otra parte, se reitera que la clasificación de los datos de personal de esta institución como nombres, firmas y rubricas inmersos en la versión pública puesta a disposición del solicitante son de carácter reservado al hacerlos identificables, situación que actualiza la hipótesis contemplada en la fracción V, artículo 110 de la LFTAIP, como se ilustra a continuación:

Lo anterior se relaciona con el Décimo séptimo, Décimo Octavo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales establecen lo siguiente:

...

Ahora bien, es dable señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) prevé lo siguiente:

...

En virtud de lo anterior, se advierte que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la LFTAIP, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares

Se proporciona la prueba de daño, correspondiente al artículo 110. fracción V.

Riesgo real, demostrable e identificable. Hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo que labora en esta Fiscalía General de la República, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, en virtud de que, como ya lo demostró esta Fiscalía General de la República en la controversia constitucional 325/2019, y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de esta, e inclusive fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En este sentido, con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a la Fiscalía General de la República, sino también para mantener la seguridad pública y nacional del Estado mexicano en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país es que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo que labora en las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que por la naturaleza de las funciones de esta Institución, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.

Así, resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia, pues, desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales, hasta la integración de expedientes que en su caso se requieran, les es posible el acceso a información sensible contenida en esos documentos, que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de la controversia constitucional 325/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal que labora en la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de reacción; por ello, es perjudicial realizar la identificación de dicho personal, pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares. Además, concluyó que esta Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida,



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.

En ese mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia adscrito a la entonces Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte confirmó que revelar la información de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales, es decir, el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate, por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña o desempeñó su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras y/o exservidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están o estuvieron encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayeran en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas; aspecto que, de ocurrir, impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

Perjuicio que supera el interés público con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras y/o ex servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda, en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las personas servidoras o ex servidoras públicas de esta Institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionada con el combate y persecución de los delitos federales.

El que los distintos mercados criminales identifiquen y conozcan plenamente al personal que compone a la Institución y cuenten con información respecto a su capacidad de fuerza y reacción,



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

esto es, el número total de personal, sus cargos y dónde se encuentran ubicados, expone a esta Fiscalía General de la República a amenazas y ataques que necesariamente tienen implicaciones negativas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, por tanto, se compromete la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la resolución emitida en la controversia constitucional en comento que esta Fiscalía acreditó con suficiente claridad la relación causal general entre la entrega de la información relativa a los servidores y/o exservidores públicos de la Institución y la afectación a la seguridad pública.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran o laboraron en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona; de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye cónyuges, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos; por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado de fuerza de la Institución.

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con la finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente, a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantengan en reserva, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a la información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. El que una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicite el nombre y cargo de todo el personal de la Fiscalía General de la República no quiere decir que deba obtener el mismo resultado, pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir, si alguno de los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución; de modo que



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

revelar información de inteligencia que afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.

Robustecen lo anterior, las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en donde manifiesta que:

...

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada con el personal que labora en esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Principio de proporcionalidad La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015, concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí se tiene que la calidad de persona servidora o exservidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos frente al derecho de acceso a la información de un particular, en una ponderación frente a los derechos humanos de los servidores y ex servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña o desempeñó el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes tienen o tuvieron la responsabilidad de investigar y perseguir delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas.

Por lo expuesto, se concluye que clasificar como reservada la información o datos que permitan la identificación, inclusive de aquella que asevere su adscripción en el presente o pasado, como personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, resulta el medio menos restrictivo frente al derecho de acceso a la información en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

En tal virtud, toda vez que se ha expuesto de forma fundada y motivada que no le asiste razón a la particular, esta Institución solicita se confirme la respuesta proporcionada inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la LFTAIP.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionado presidente:

PRIMERO. - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por reconocida mi personalidad, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO. - En su oportunidad y previo los trámites de ley, confirme la respuesta otorgada por esta Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la LFTAIP.” (sic)

X. El 02 de septiembre de 2024, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 156, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes.

XI. El 05 de septiembre de 2024, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena sometió a consideración del Pleno de este Instituto un proyecto de resolución para el presente recurso de revisión; sin embargo, el mismo no fue aprobado por la mayoría, por lo que se determinó el retorno del recurso de revisión.

XII. El 05 de septiembre de 2024, el Comisionado Presidente acordó el retorno del expediente del recurso de revisión **RRA 10043/24** a la Ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

XIII. El 13 de septiembre de 2024, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información de la Oficina de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, notificó al sujeto obligado un requerimiento de información adicional en los siguientes términos:

1. Identifique el universo de información que da atención a lo requerido en la solicitud. Esto es, que indique de cuántos y cuáles documentos se trata, identificándolos por nombre y número de fojas, además de realizar una descripción detallada de cada uno, precisando su asunto, el tema que trata y los pormenores de su contenido, así como de los anexos con los que cuenten, en su caso.
2. Señale el cargo del personal de la Institución que se encuentra inmerso en las expresiones documentales que dan atención a lo requerido, el área a la que se encuentran adscritos, y las funciones que desempeñan, precisando si estas son de carácter operativo o administrativo.

XIV. El 19 de septiembre de 2024, el sujeto obligado remitió a este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FGR/UETAG/004190/2024, de la misma fecha, emitido por el Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, en el que se señala lo siguiente:



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

En relación con el recurso de revisión RRA 10043/21 se informa que, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se turnó a la unidad administrativa correspondiente la cual se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida, por tal motivo la misma será remitida a la brevedad

ÚNICO. - Tener por realizadas las consideraciones señaladas en el presente escrito.

XV. El 24 de septiembre de 2024, el sujeto obligado envió a este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FGR/UETAG/004189/2024, emitido por la Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, en el que dio respuesta al requerimiento formulado, en los siguientes términos:

Al respecto, posterior a consultar a la Unidad Administrativa que cuenta con la información, en relación con su requerimiento identificado con el número 1, se informa lo siguiente:

Documentos	Tipo de documento	Nombre	Número de fojas	Tema y contenido	Anexos
Uno (1)	Acuse del escrito inicial	Controversia constitucional	109	Violación a las garantías institucionales e invasión de esferas competenciales de la Fiscalía General de la República. Contiene los argumentos jurídicos que sustentan que la orden de entregar la información distorsiona el sistema de competencias previsto a nivel constitucional y afecta la autonomía de la Fiscalía General en relación a sus características orgánicas y funcionales, ya que le impide	Sin anexos

Documentos	Tipo de documento	Nombre	Número de fojas	Tema y contenido	Anexos
				asegurar y consolidar su operatividad como órgano exclusivo encargado de la investigación y persecución de los delitos del orden federal e Institución de Procuración de Justicia al imposibilitar el desarrollo efectivo de los principios de autonomía, objetividad, eficiencia y debida diligencia, que se ven mermados al hacer públicos los nombres y cargos de sus servidores públicos, pues la divulgación de tal información actualiza y potencializa riesgos y amenazas a su vida, seguridad y salud	

Respecto del numeral 2 citado con antelación, se hace del conocimiento lo siguiente:



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Área de adscripción	Funciones	Tipo	Cargo
Unidad de Constitucionalidad	Artículo 18, fracciones I, II, III y XII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República.	Administrativo	Titular de la Unidad. Coordinador de proyectos "A". Coordinador de proyectos "A". Abogado supervisor.

Una vez atendido el requerimiento de mérito, es imprescindible reiterar ante esa H. Ponencia que hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a esta Fiscalía, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública, en virtud de que, en primer lugar, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución a la controversia constitucional 325/2019 interpuesta por esta Fiscalía, e inclusive fue confirmado por ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, toda vez que, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución General

En este sentido, con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a esta Fiscalía General, sino también para mantener la seguridad pública del Estado mexicano -en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país- es que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo adscrito a las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que por la naturaleza de las funciones de esta Institución, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.

Así, resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia, pues, desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales, hasta la integración de expedientes que en su caso se requieran, les es posible el acceso a información sensible contenida en esos documentos, que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de la controversia constitucional 325/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal adscrito a la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de reacción; por ello, es perjudicial realizar la identificación de dicho personal, pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares. Además, concluyó que esta Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida, se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

En ese mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia adscrito a la otrora Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte confirmó que revelar la información de las personas servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales, es decir, el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate, por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras públicas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayeran en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

En adición a lo anterior, la identificación de estas y de sus actividades en cumplimiento del servicio público que tienen encomendado permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet y redes sociales.

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas; aspecto que, de ocurrir, impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

Por otra parte, con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las personas servidoras públicas de esta Institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionada con el combate y persecución de los delitos federales.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el antes Centro Nacional de Planeación, Análisis e



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona; de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye cónyuges, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos; por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado de fuerza de la Institución.

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con la finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente, a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público que lo acusa salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantengan en reserva, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a la información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. El que una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicite el nombre y cargo del personal de la FGR no quiere decir que deba obtener el mismo resultado, pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir, si alguno de los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución; de modo que revelar información de inteligencia que afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.

Robustecen lo anterior, las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en donde manifiesta que:

“...está de por medio la integridad de los servidores públicos de la FGR que son quienes materializan las funciones constitucionales del ente autónomo, pues constituye hecho notorio que el clima de violencia criminal en el que ejercen sus funciones tanto las instituciones de procuración de justicia, como las instituciones policiacas e, inclusive, algunos miembros de la judicatura genera enormes riesgos que es necesario disminuir en beneficio de tales personas, pues ello redundaría en la



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

protección de los derechos humanos más elementales de los integrantes de nuestra sociedad en general.

...

Difundir los nombres de algunos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de otras personas de la FGR, a personas diversas de las que participan en los procesos penales federales, así como revelar la estructura administrativa de sus áreas administrativas, debilita la seguridad pública, cuyos fines son, como ya expuse, la salvaguarda de los derechos humanos relativos a la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

...

Además, la Constitución Federal no realiza distinción alguna entre un tipo de personal y otro de la FGR, sino que su artículo 21 se refiere a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por lo que considero que esta protección de reserva de datos incluye a todos los integrantes que conformen a todo ese ente constitucional autónomo, sin discriminar a ninguno de sus integrantes, y mucho menos privarlo de la protección que le brinda la reserva tanto de sus datos, como de la estructura administrativa a la que pertenece.

Las personas servidoras públicas administrativas de la FGR también forman parte de la estructura para la investigación y el combate al delito, y son también vulnerables de poner en riesgo su vida, seguridad y salud, no considerarlo así, constituye una postura discriminatoria, como si solamente los Agentes del Ministerio Público Federal correrán riesgos y los demás empleados estuvieran exentos, no obstante que unos y otros comparten espacios de trabajo e intervienen en los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la FGR.”

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada el personal adscrito a esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Por lo anterior representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/20152 concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí, se tiene que la calidad de persona servidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos frente al derecho de acceso a la información de un particular, en una ponderación frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes coadyuvan en la investigación y persecución de delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas.

Por lo expuesto, se concluye que clasificar como reservada la información o datos que permitan la identificación, inclusive de aquella que asevere su adscripción en el presente o pasado, como personas servidoras públicas Fiscalía General de la República, inclusive de carácter administrativo, resulta el medio menos restrictivo frente al derecho de acceso a la información en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Para mayor claridad, sobre la clasificación de reserva de los datos de identificación del personal administrativo sobre los que trata el presente desahogo, se proporciona el siguiente extracto de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/193, a decir:



140. Al respecto, este Tribunal Constitucional sostiene que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, permitir a los agentes criminales conocer sus nombres y cargos revelaría capacidad total que tiene la Subprocuraduría encargada de investigar delitos contra la salud; falsificación o alteración de moneda; hidrocarburos, corrupción y pornografía de personas menores de dieciocho años; turismo sexual; acopio y tráfico de armas; trata de personas; secuestros, entre otros.



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 325/2019

FORMA A-2
12

21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La parte de la investigación, lo cierto es que tiene injerencia en la integración de informes, análisis y participan en la producción de información clave en la investigación y persecución del mercado criminal más peligroso que opera en el territorio nacional.

142. Por lo anterior, lo procedente es declarar *inválida* la resolución del INAI y, en consecuencia, debe emitir una nueva resolución en la que confirme la reserva de información toda vez que entregar la información objeto de esta controversia incide negativamente en el ejercicio de la esfera competencial constitucional que la Fiscalía tiene conferida en los artículos 21 y 102 de la Constitución General.

143. Ahora bien, al resultar fundados los conceptos de invalidez en estudio y toda vez que los restantes refieren a cuestiones de mera legalidad y a la afectación de los principios que rigen el actuar de las instituciones de seguridad pública sin que al respecto esta Suprema Corte advierta algún tipo de evidencia dentro del expediente que así lo demuestre; entonces, es innecesario ocuparse de ellos pues a ningún fin práctico conduciría su análisis.

En este contexto, lo anterior se precisa a efecto de que sea compartido con el resto de las Ponencias, valorado y tomado como hecho notorio⁴ para la determinación del presente medio de impugnación, el cual debe entenderse, en general, a aquel que por el conocimiento humano se considera cierto e indiscutible desde el punto de vista jurídico, y como a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial y/o administrativa, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Con el pronunciamiento previo, este sujeto obligado tiene por desahogado el requerimiento de información formulado, y solicita a usted C. Comisionada Ponente:

ÚNICO. - Tener por realizadas las consideraciones señaladas en el presente escrito.

...



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

CONSIDERANDOS

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 280/2023, y con fundamento en los artículos 6º, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 146, 150 y 151, y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción II, 146, 147 y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, en los diversos 6, 10, 12, fracciones I, V y XXXV, y 18, fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto.

SEGUNDO. Improcedencia y sobreseimiento. Por cuestión de técnica jurídica y previo al análisis de fondo, esta autoridad resolutora analizará de manera oficiosa si en el presente recurso de revisión se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, ya que debe tomarse en consideración que dichas causales están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso y, al tratarse de una cuestión de orden público, su estudio debe ser preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que **las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público**, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia **subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante**, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación.

Al respecto, el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes:



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

ARTÍCULO 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente Ley;
- II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;
- III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;
- IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente Ley;
- V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
- VI. Se trate de una consulta, o
- VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

I. OPORTUNIDAD

El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma, dentro del plazo de 15 días, establecido en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

II. LITISPENDENCIA

Al respecto, esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial Federal por parte de la persona recurrente, por lo que no se actualiza la causal establecida en la fracción II, del artículo 161 en cuestión.

III. PROCEDENCIA

Asimismo, se advierte que el presente recurso de revisión actualiza uno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que el agravio de la persona recurrente se centra en **combatir la clasificación de la información y el cambio de modalidad**.

En este entendido, se advierte que no se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 161 analizado.

IV. FORMALIDADES

Este Instituto no realizó prevención alguna a la persona recurrente, pues el recurso cumplió con las formalidades previstas en el artículo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

a la Información Pública, por lo que no se actualiza el supuesto de improcedencia contemplado en la fracción IV, del artículo 161 en análisis.

V. VERACIDAD

Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la persona recurrente en su recurso de revisión, no se desprende que haya impugnado la veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 161 en análisis.

VI. CONSULTA

Asimismo, de la revisión al recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente, no se considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 161 en cuestión.

VII. AMPLIACIÓN

Finalmente, del contraste de la solicitud de información de la persona recurrente con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto advierte que no se actualiza ampliación alguna.

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, resulta importante considerar que el artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I.** El recurrente se desista expresamente del recurso;
- II.** El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;
- III.** El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o
- IV.** Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, **se advierte que no se actualizan las causales de sobreseimiento relacionadas con las fracciones I, II, III y IV**, ya que la persona recurrente no se ha desistido del recurso; no se tiene constancia de que haya fallecido y el sujeto obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso quedara sin materia, ni se advirtió causal de improcedencia alguna.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Así las cosas, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto.

TERCERO. Resumen de agravios. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio hecho valer, así como los alegatos formulados por la autoridad, eliminando los aspectos técnicos de la materia, a fin de que, con lenguaje ciudadano e identificación de los hechos torales, se permita identificar el problema planteado.

Una persona **solicitó** todas aquellas resoluciones, acuerdos, etc, en donde se haya aplicado la teoría del mosaico, en versión pública, en formato abierto, es decir, en Word, para no generar un costo.

El ente recurrido previno a la persona recurrente a efectos de que precisara la expresión documental y aportara mayores elementos que permitieran su localización, y así estar en posibilidad de realizar una búsqueda en las diversas unidades administrativas.

En desahogo, la persona indicó que se refiere a todo aquel documento en el que se haya aplicado la teoría del mosaico, por lo que se debería turnar la solicitud a todas las áreas que conforman la Fiscalía.

Tras una prórroga, el sujeto obligado, a través de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, señaló:

- Que la solicitud fue turnada a las unidades administrativas competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Fiscalía General de la República, las cuales, posteriores a realizar una búsqueda de la información, localizaron documentación coincidente, en un total de 109 fojas útiles.
- Que existe un impedimento material y jurídico para atender la modalidad señalada, toda vez que, por el volumen de la documentación, no es posible su remisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, además de que únicamente obra de manera física en los archivos de la Institución.
- Que la información se pone a disposición en versión pública, previo pago de los costos de reproducción correspondientes, dado que se testarán los nombres del personal de la Institución que actualizan los supuestos de información clasificada como reservada, en términos de lo establecido por la fracción V, artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Al presentar su prueba de daño, indicó que hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo que labora en esa Fiscalía, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, dado que se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, precisó que entregar el nombre y cargo de las personas servidoras y/o exservidoras públicas de la Fiscalía permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras y/o exservidoras públicas.

Finalmente, indicó que la reserva fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Fiscalía en su Vigésima primera sesión ordinaria 2024¹, en la cual se confirmó la clasificación de la información.

Inconforme, la persona recurrente impugnó que no le fue entregada la información requerida, además de que no se le entregó el acuerdo con las firmas correspondientes para acceder a su determinación de reserva, la cual estima que no se actualiza, por lo que se advierte que los agravios consisten en la clasificación de la información y el cambio de modalidad de entrega de la información.

En alegatos, el ente recurrido reiteró su respuesta inicial.

Posteriormente, en desahogo a un requerimiento de información adicional, el sujeto obligado señaló lo siguiente:

- Que la expresión documental que puso a disposición es el acuse del escrito inicial de una Controversia constitucional, cuyo tema es la violación a las garantías institucionales e invasión de esferas competenciales de la Fiscalía General de la República, el cual contiene los argumentos jurídicos que sustentan que la orden de entregar la información distorsiona el sistema de competencias previsto a nivel constitucional y afecta la

¹ Disponible: <https://fgr.org.mx/en/transparencia/AccessoInformacionPublica>



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

autonomía de la Fiscalía General en relación a sus características orgánicas y funcionales, ya que le impide asegurar y consolidar su operatividad como órgano exclusivo encargado de la investigación y persecución de los delitos del orden federal e Institución de Procuración de Justicia al imposibilitar el desarrollo efectivo de los principios de autonomía, objetividad, eficiencia y debida diligencia, que se ven mermados al hacer públicos los nombres y cargos de sus servidores públicos, pues la divulgación de tal información actualiza y potencializa riesgos y amenazas a su vida, seguridad y salud.

- Que la expresión documental que atiende lo requerido no contiene anexos.
- Que el área de adscripción del personal de la Institución que se encuentra inmerso en la expresión documental es la Unidad de Constitucionalidad, cuyas funciones se establecen el artículo 18 fracciones I, II, III y XII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, que el tipo de cargo es administrativo y que los cargos son Titular de la Unidad; Coordinador de proyectos "A"; Coordinador de proyectos "A" y Abogado supervisor.
- Que cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a esta Fiscalía, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública, en virtud de que, en primer lugar, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución a la controversia constitucional 325/2019 interpuesta por la Fiscalía, e inclusive fue confirmado por ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, toda vez que, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución General.
- Que si bien es cierto el personal administrativo adscrito a diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica no está en la primera línea de intervención, también lo es que por la naturaleza de las funciones de esta Institución, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.

CUARTO. Problema planteado. La presente resolución se centrará en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado en la solicitud de acceso a la información con número de folio **330024624001436**, resolviendo específicamente respecto de la clasificación de la información y el cambio de modalidad, de conformidad con la Ley Federal



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normativa aplicable al caso particular.

QUINTO. Estudio de fondo. En primer orden de ideas, se considera que lo pertinente es estudiar de manera **separada**, cada uno de los agravios hechos valer por la persona recurrente, lo anterior en virtud de que este Instituto se encuentra facultado de conformidad con la siguiente jurisprudencia:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

Así, se tiene que el estudio correspondiente a los agravios en el juicio podrá realizarse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

✓ **Análisis del cambio de modalidad de la información**

Como punto de partida es importante señalar que el sujeto obligado puso a disposición de la parte recurrente un total de 109 fojas útiles, relativas al documento en donde se hace referencia a la aplicación de la teoría del mosaico en versión pública.

Sobre tal aspecto, debe indicarse lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vinculación con la modalidad, ello en correlación al agravio combatido por el particular:

ARTÍCULO 125. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

...

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

...

ARTÍCULO 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante

...

ARTÍCULO 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

ARTÍCULO 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

ARTÍCULO 138. La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de las cuotas de reproducción correspondientes.

ARTÍCULO 139. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

...

ARTÍCULO 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

Por su parte, el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública³, establece lo siguiente;

VIGÉSIMO NOVENO. Se privilegiará el acceso en la modalidad de entrega y de envío elegidos por el solicitante, en el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega en formatos abiertos; cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer todas las modalidades de entrega disponibles; en cualquier caso, se deberá fundar y motivar la modificación respectiva, lo que deberá notificarse al solicitante y registrarse en el Sistema, cuando proceda.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

De los preceptos legales citados con antelación, se advierte que los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Asimismo, para presentar una solicitud, la persona podrá señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En ese sentido, el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante.

Ahora bien, cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

De igual manera, en cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades, así como también, si la información requiere de la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

También, los costos de reproducción y, en su caso, de envío para la obtención de la información deberán ser cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega por parte del sujeto obligado.

Así, las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados.

En tales consideraciones, la entrega de la información deberá hacerse, en la medida de lo posible, en la forma de reproducción solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado.

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Lo anterior, pues si bien los sujetos obligados deben privilegiar en todo momento el derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho.

En tal tenor, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga.

En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos.

Finalmente, se establece que cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Por otra parte, el **Criterio SO/008/2017** emitido por el Pleno de este Instituto establece lo siguiente:

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

Del criterio citado, se tiene que cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado justifique el impedimento para atender la misma; y notifique a la persona solicitante la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

En esa misma guisa de ideas, la fracción XIII del numeral Segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

pública, señala que la modalidad de entrega es el formato a través del cual se puede dar acceso a la información, entre los cuales, se encuentra la consulta directa, la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos aquellos que resulten aplicables derivados del avance de la tecnología.

Derivado de la normativa expuesta, es posible concluir que en aquellos casos en los que no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado:

- a. Justifique el impedimento para atender la misma; y
- b. Notifique a la persona solicitante la disponibilidad de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

En ese sentido, en el presente asunto y en relación con el primero de los elementos referido en el inciso a); es decir, la justificación del impedimento para atender la modalidad de entrega elegida, cabe recordar que, en la respuesta analizada, el sujeto obligado señaló que lo requerido solo obra en formato físico, por lo que justificó el impedimento para atender la modalidad solicitada.

Aunado a lo anterior, si bien el ente recurrido refirió que, toda vez que por el volumen de la documentación no es posible su remisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, además de que únicamente obra de manera física en los archivos de la Institución, lo cierto es que omitió notificar la disponibilidad de la información en copia simple, copia certificada, o bien, consulta directa, precisando que las veinte primeras fojas simples o certificadas se otorgaran de manera gratuita, así como la posibilidad de enviar a través del servicio de mensajería, y omitió informar los costos de reproducción tanto de foja simple y/o certificada.

Luego entonces, el agravio hecho valer por la parte recurrente sobre el cambio de modalidad de entrega resulta **PARCIALMENTE FUNDADO**, pues si bien el ente recurrido hizo valer un impedimento para atender la solicitud por medios electrónicos, lo cierto es que omitió mencionar la totalidad de las modalidades.

✓ **Análisis de la clasificación de la información**

En primer lugar, es importante recordar que, desde respuesta inicial, el sujeto obligado informó que testaría el nombre de personal, toda vez que divulgar información que los haga identificables pondría en riesgo su vida, seguridad y salud, en términos del 110, fracción V de la Ley Federal de la materia y, proporcionado el hipervínculo para la consulta de su Acta.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

En ese sentido, el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala lo siguiente:

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Por su parte, el Vigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas:

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

De la normatividad citada se advierte que, como información susceptible de clasificarse como reservada se encuentra aquella cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, por lo que, para clasificarla bajo dicho supuesto, resulta necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

Dicho lo anterior, se debe señalar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera como información pública de oficio, los datos de servidores públicos, ya que su publicidad permite cumplir los objetivos que persigue dicha ley, entre los que se encuentran transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, sin embargo, en términos del artículo 68 de la Ley en comento, como excepción a la regla general sobre la divulgación de esta información encuentre en alguno de los supuestos de clasificación, ya sea reservada o confidencial.

En atención a la reserva invocada por la Fiscalía General de la República, cabe precisar que el artículo 6° Constitucional dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Asimismo, es importante tomar en consideración que, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 3 que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona; salvo, que deba reservarse de forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Igualmente, en el artículo 97 de la Ley Federal de la materia citada, se señala que la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

En ese sentido, conviene mencionar que, por regla general, el directorio de servidores públicos y la información que pueda obrar en su expediente personal, creado con motivo del cargo público que en su caso desempeñen, es una obligación de transparencia contemplada en el artículo 70, fracciones VII, VIII, X, XII, XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), por lo que es información de naturaleza pública.

No obstante, existe una excepción relativa a aquellos servidores públicos que realicen actividades operativas en materia de seguridad, tal y como lo sostiene el **Criterio-06/09** -aplicable por analogía-; el cual, señala que existen servidores públicos tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional, a través de acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, en ese sentido, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de los nombres y de las funciones que desempeñan o desempeñaron estos servidores públicos puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.

Es así como, el nombre de servidores públicos que desempeñan funciones de carácter operativas, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública son susceptibles de clasificarse como información reservada.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

En ese sentido, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Carta Magna señala.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Establecido lo anterior, cabe señalar que el sujeto obligado indicó que el personal cuyos nombres se clasificarían son de la Unidad de Constitucionalidad, cuyas funciones se establecen el artículo 18 fracciones I, II, III y XII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, que el tipo de cargo es administrativo, y que los cargos específicos son Titular de la Unidad; Coordinador de proyectos "A"; Coordinador de proyectos "A" y Abogado supervisor.

En ese sentido, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, señala:

Artículo 5. Unidades Administrativas de la Fiscalía General.

Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia la Fiscalía General contará con Unidades Administrativas organizadas y adscritas de la forma siguiente:

I. Oficina del Fiscal General:

- a. Jefatura de Oficina;
- b. Consejería General:

...

- i. Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos;
- a). Unidad de Constitucionalidad, y

...

Artículo 8. Ejercicio de las facultades.

Las facultades de las personas titulares de las Unidades Administrativas a que se refiere el artículo 5 de este Estatuto Orgánico, se ejercerán por su conducto y por las personas servidoras públicas a su cargo, de conformidad con lo que establezca la persona titular de la Fiscalía General, la persona que sea superior en jerarquía y en los Manuales de Organización y de Procedimientos que se emitan.

...



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Artículo 18. Facultades de la persona titular de la Unidad de Constitucionalidad.

Adicionalmente a las previstas en el artículo 7 del presente Estatuto Orgánico, la persona titular de la Unidad de Constitucionalidad tendrá las siguientes facultades:

I. Apoyar a la persona titular de la Fiscalía General en el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 105, fracción III, y 107, fracciones V, VIII y XIII, de la Constitución en materia de solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción y de denuncia de contradicción de tesis;

II. Intervenir en los juicios de controversia constitucional a que se refiere la fracción I, inciso I), del artículo 105 de la Constitución, en los términos de las disposiciones aplicables y conforme a las instrucciones de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona que sea de su superior jerarquía;

III. Apoyar a la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos en la representación de la persona titular de la Fiscalía General para el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 19, fracciones XXXVI, inciso b), y XXXVII, inciso b), de la Ley, en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

IV. Analizar las normas generales que se publiquen en los periódicos y gacetas oficiales de la Federación, la Ciudad de México y las demás entidades federativas y, en su caso, proponer a la persona titular de la Fiscalía General el ejercicio de la acción constitucional correspondiente, en términos del artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución y de su ley reglamentaria;

V. Emitir la opinión que corresponda respecto del desahogo de las vistas que los órganos del Poder Judicial de la Federación den a las Unidades Administrativas, con motivo de la inaplicación de normas generales;

VI. Revisar los criterios y precedentes del Poder Judicial de la Federación en materia penal, procesal penal y de amparo penal, con objeto de proponer y, en su caso, implementar, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, acciones de litigio estratégico, atendiendo a los intereses de la Fiscalía General;

VII. Operar y administrar, en coordinación con la Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas, un sistema de información que contenga los criterios de interés para la Fiscalía General emitidos por el Poder Judicial de la Federación;

VIII. Participar, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, en el litigio de los asuntos radicados en los órganos del Poder Judicial de la Federación, conforme a las instrucciones de la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, a cuyo efecto podrá requerir a las Unidades Administrativas competentes, la información y documentación que sea necesaria para el ejercicio de esa función;

IX. Opinar sobre proyectos de reformas a la Constitución, así como respecto de la constitucionalidad de proyectos o reformas de ley y demás disposiciones, previo visto bueno de la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos;

X. Desahogar las consultas que en el ámbito de su competencia le formulen las Unidades Administrativas;

XI. Atender las peticiones que sean formuladas en términos del artículo 8 de la Constitución, en el ámbito de su competencia, y

XII. Las demás que se establezcan en algún otro ordenamiento jurídico que sea aplicable en el ámbito de su competencia.

...



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

De la normatividad citada previamente, es posible desprender que para el cumplimiento de los asuntos de su competencia la Fiscalía General contará, entre otras unidades administrativas con la Unidad de Constitucionalidad dependiente de la Unidad Especializada en asuntos jurídicos de la Consejería General, que a su vez es dependiente de la Oficina del Fiscal General.

El Titular de la Unidad de Constitucionalidad tiene entre sus funciones las siguientes:

- Apoyar a la persona titular de la Fiscalía General en el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 105, fracción III, y 107, fracciones V, VIII y XIII, de la Constitución en materia de solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción y de denuncia de contradicción de tesis.
- Intervenir en los juicios de controversia constitucional a que se refiere la fracción I, inciso I), del artículo 105 de la Constitución, en los términos de las disposiciones aplicables y conforme a las instrucciones de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona que sea de su superior jerarquía.
- Apoyar a la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos en la representación de la persona titular de la Fiscalía General para el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 19, fracciones XXXVI, inciso b), y XXXVII, inciso b), de la Ley, en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.
- Analizar las normas generales que se publiquen en los periódicos y gacetas oficiales de la Federación, la Ciudad de México y las demás entidades federativas y, en su caso, proponer a la persona titular de la Fiscalía General el ejercicio de la acción constitucional correspondiente, en términos del artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución y de su ley reglamentaria.
- Emitir la opinión que corresponda respecto del desahogo de las vistas que los órganos del Poder Judicial de la Federación den a las Unidades Administrativas, con motivo de la inaplicación de normas generales.
- Revisar los criterios y precedentes del Poder Judicial de la Federación en materia penal, procesal penal y de amparo penal, con objeto de proponer y, en su caso, implementar, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, acciones de litigio estratégico, atendiendo a los intereses de la Fiscalía General.
- Operar y administrar, en coordinación con la Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas, un sistema de información que contenga los criterios de interés para la Fiscalía General emitidos por el Poder Judicial de la Federación.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

- Participar, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, en el litigio de los asuntos radicados en los órganos del Poder Judicial de la Federación, conforme a las instrucciones de la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, a cuyo efecto podrá requerir a las Unidades Administrativas competentes, la información y documentación que sea necesaria para el ejercicio de esa función.
- Opinar sobre proyectos de reformas a la Constitución, así como respecto de la constitucionalidad de proyectos o reformas de ley y demás disposiciones, previo visto bueno de la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos.
- Desahogar las consultas que en el ámbito de su competencia le formulen las Unidades Administrativas.
- Atender las peticiones que sean formuladas en términos del artículo 8 de la Constitución, en el ámbito de su competencia.
- Las demás que se establezcan en algún otro ordenamiento jurídico que sea aplicable en el ámbito de su competencia.

Además, es de precisar que las facultades de las personas titulares de las Unidades Administrativas a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico, se ejercerán por su conducto y por las personas servidoras públicas a su cargo, de conformidad con lo que establezca la persona titular de la Fiscalía General, la persona que sea superior en jerarquía y en los Manuales de Organización y de Procedimientos que se emita

Tomando en consideración lo anterior, así como las funciones que realizan en la Unidad de Constitucionalidad, es posible advertir que ninguno de los servidores públicos adscritos a dicha unidad tiene a su cargo funciones operativas relacionadas con la seguridad pública y que, inclusive, no se encuentran adscritos a una unidad administrativa que esté facultada o bien, que tenga injerencia en actividades de orden operativo que se encuentren relacionadas con “la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos”.

Lo anterior se dice así, en virtud de que fue el sujeto obligado quien definió que los servidores públicos respecto de los cuales se protege el nombre, se encuentran adscritos a la Unidad de Constitucionalidad, que tal como ya se señaló, cuenta con funciones estrictamente relacionadas con recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten; respecto de la interposición de controversias constitucionales relacionadas con el amparo en contra de resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales y; contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión, es decir, actividades de



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

índole administrativo, encaminadas a defender las determinaciones de la propia Fiscalía General de la República o bien, de las que esta sea parte.

Aunado a ello, este Instituto no es omiso en tomar en consideración los argumentos realizados por la Fiscalía General de la República, en relación a que cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a la Fiscalía, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública, en virtud de que, en primer lugar, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución a la controversia constitucional 325/2019 interpuesta por la Fiscalía, e inclusive fue confirmado por ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, toda vez que, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución General

Al respecto, es conveniente señalar, como hecho notorio que en la Controversia Constitucional 325/2019², la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar la invalidez de la resolución emitida en el recurso de revisión RRA 9481/19 el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad con las consideraciones y para los efectos precisados en los apartados VIII y IX de la determinación.

En ese sentido, a efecto de dar contexto, es importante señalar que en el diverso RRA 9418/19 [mismo que también se trae como hecho notorio], una persona requirió a la Fiscalía General de la República que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, le proporcionara el nombre y cargo de todo el personal (incluidos Agentes del Ministerio Público Federal, Fiscales y Orientadores) dependientes de las siguientes áreas: • Delegación en Veracruz. • Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. • Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. • Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. • Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. • Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos. •

² Disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/resoluciones/documentos/CC-325-2019-Engrose.pdf>



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. • Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. • Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. • Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. • Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación de Delincuencia Organizada. • Coordinación de Supervisión y Control Regional. • Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. • Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. • Dirección General de Control de los Juicios de Amparo. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. • Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales. • Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos Federales. • Coordinación General de Investigación. • Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. • Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. • Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas. • Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia. • Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.

En respuesta, la Fiscalía General de la República informó que se encontraba una imposibilidad jurídica para remitir el nombre de Agentes del Ministerio Público Federal, Fiscales y Orientadores, así como el de personal administrativo adscrito a la SEIDO, toda vez que actualiza hipótesis de información clasificada como reservada en términos de la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención a la inconformidad de la persona respecto de la clasificación de lo requerido, este Instituto emitió una resolución en la que resolvió entregar los nombres de las personas Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritas a las áreas señaladas por el particular, dependientes de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad — actualmente Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; los cargos de todo el personal operativo/sustantivo adscrito a las tres subprocuradurías mencionadas y a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y; los nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y sus unidades dependientes.

Respecto de dicha resolución, la Fiscalía General de la República interpuso una Controversia Constitucional cuyo expediente de identificación es el 325/2019, la cual resolvió declarar la



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

invalidez de la resolución emitida en el recurso de revisión RRA 9481/19 emitido por el Pleno de este Instituto, sosteniéndose en los argumentos los siguientes:

- Que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, permitir a los agentes criminales conocer sus nombres y cargos revelaría capacidad total que tiene la Subprocuraduría encargada de investigar delitos contra la salud; falsificación o alteración de moneda; hidrocarburos, corrupción y pornografía de personas menores de dieciocho años; turismo sexual; acopio y tráfico de armas; trata de personas; secuestros, entre otros.
- Que con las pruebas aportadas al juicio, la Fiscalía General de la República también demostró la conexión causal general entre entregar los nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la afectación a la seguridad pública. Si bien no se trata del personal que está directamente al frente de la investigación, lo cierto es que tiene injerencia en la integración de informes, análisis y participan en la producción de información clave en la investigación y persecución del mercado criminal más peligroso que opera en el territorio nacional.

En cumplimiento a dicha determinación, el Pleno de este Instituto coligió resolver el diverso recurso de revisión RRA 9418/19-BIS, en el que se concluyó procedente la clasificación de la información en términos de la fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un período de cinco años.

Respecto de lo anterior, este Instituto advierte que contrario a lo señalado por el sujeto obligado, es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determina la reserva del nombre y cargo de diversos servidores públicos con actividades de índole administrativo, no obstante, que se caracterizan por pertenecer a áreas de la Fiscalía General de la República que tienen injerencia en información clave en la investigación y persecución del mercado criminal más peligroso que opera en el territorio nacional.

Así, este Instituto considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 325/2019 distinguió no solo al personal operativo del administrativo, sino que además, las atribuciones con las que cuentan las unidades administrativas a las que se encuentran adscritos el personal administrativo respecto del cual se requirió la información.

En ese sentido, dicha distinción también debe de realizarse en el presente caso, pues el personal respecto del cual se requiere la información, no solo tiene la calidad de ser



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

administrativo sino que, además, se encuentra adscrito a una unidad administrativa que no se encarga sustancialmente de realizar actividades de investigación y persecución del delito.

Por lo que, en consecuencia, este Instituto considera que no se acredita un vínculo, entre las personas servidoras públicas adscritas a la Unidad de Constitucionalidad y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud y, tampoco se acredita el potencial daño o riesgo que causaría su difusión de dicha información.

Aunado a ello, este Instituto advierte que, en el caso en concreto, no resulta aplicable la argumentación del sujeto obligado encaminada a actualizar la teoría del mosaico, pues si bien señala que la misma constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia, por lo que se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil; lo cierto es que en el caso en concreto, el conocer el nombre de personal adscrito a una unidad administrativa, que no solamente tiene actividades de tipo administrativo sino que además, se encuentra a una unidad administrativa que no se vincula con la investigación y persecución del delito, por lo que de ninguna manera pudiera ser un dato que en suma con otros, potencialice la evasión de la procuración de justicia, máxime que en el caso en concreto, el sujeto obligado no ofreció prueba alguna que sustentara su dicho.

Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que el agravio de la parte recurrente, fundamentado en la fracción I, del artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta **FUNDADO**, ya que no se actualizó la reserva de los nombres del personal de Unidad de Constitucionalidad en términos de la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal en la materia, al ser personal administrativo adscrito a una unidad administrativa que no atienden a actividades de investigación y persecución de un delito.

Bajo esas consideraciones, y de conformidad con el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera que lo procedente es **MODIFICAR** la respuesta del sujeto obligado, e instruir a que ponga a disposición de la persona recurrente la versión íntegra del acuse del escrito inicial de una Controversia constitucional, cuyo tema es la violación a las garantías institucionales e invasión de esferas competenciales de la Fiscalía General de la República.

Lo anterior, en las modalidades de consulta directa, copias simples y certificadas, cuya entrega debe ser gratuita respecto de las primeras veinte fojas, de conformidad con lo previsto en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, brindando la posibilidad de recibir la información en su domicilio, previo pago por el servicio de correo certificado, e informando los costos de reproducción tanto de las hojas simple y certificadas.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a esta resolución mediante dicha modalidad.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente a través del medio señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones.

Por lo expuesto y fundado, este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y con fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se **MODIFICA** la respuesta emitida por el sujeto obligado.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución, y en términos del artículo 159, párrafo segundo del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de los artículos 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en 168, 169, 170 y 171 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Se hace del conocimiento de la persona recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

SEXTO. Con fundamento en los artículos 159 y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia del sujeto obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia.

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la persona recurrente para su atención el teléfono 01 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución.

NOVENO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.

Así lo resolvieron por unanimidad, y firman, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara -con voto particular-, siendo ponente la segunda de los mencionados, en sesión celebrada el 02 de octubre de 2024, ante Ana Yadira Alarcón Márquez, Secretaría Técnica del Pleno.

Adrián Alcalá Méndez
Comisionado Presidente

**Norma Julieta del Río
Venegas**
Comisionada

**Blanca Lilia Ibarra
Cadena**
Comisionada

**Josefina Román
Vergara**
Comisionada

Ana Yadira Alarcón Márquez
Secretaría Técnica del Pleno



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Fiscalía
General de la República
Folio de la solicitud: 330024624001436
Número de expediente: RRA 10043/24
Comisionada Ponente: Norma Julieta del Río Venegas

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RRA 10043/24, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 02 de octubre de 2024.

